



Asamblea General

Distr. general
23 de abril de 2015
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 68º período de sesiones
(13 a 22 de noviembre de 2013)**

Nº 49/2013 (Myanmar)

Comunicación dirigida al Gobierno el 1 de julio de 2013

Relativa a Tun Aung (también conocido como Nurul Haque)

El Gobierno no ha respondido a la comunicación.

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. El mandato fue prorrogado por otros tres años mediante la resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, o discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. A continuación se resume el caso que fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

4. El Sr. Tun Aung (en lo sucesivo, el Sr. Aung), también conocido como Nurul Haque, nacido en 1948, es nacional de Myanmar y profesa la fe musulmana. Es médico retirado, actual presidente del Consejo de Asuntos Islámicos del Distrito de Maungdaw y dirigente comunitario. Habitualmente reside en la ciudad de Maungdaw, estado de Rakhine (Myanmar).

5. El 11 de junio de 2012, el Sr. Aung fue convocado a la jefatura del Departamento de Supervisión e Investigación de la Migración Transfronteriza (en adelante, NaSaKa, que es la sigla por la que se lo conoce habitualmente) para interrogarlo. Se le confiscaron una computadora portátil y dos teléfonos móviles, que al parecer no eran suyos. Seguidamente, agentes del NaSaKa lo detuvieron sin orden judicial y se lo llevaron preso.

6. Inmediatamente después de su detención, el Sr. Aung fue recluido en la jefatura del NaSaKa en Maungdaw. Posteriormente fue trasladado al Cuartel General de la Región Militar Occidental para seguir siendo interrogado. Según la fuente, su traslado a una instalación militar contraviene el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, que obliga a que la persona arrestada sea conducida inmediatamente a una comisaría de policía. El Sr. Aung fue trasladado a la prisión de Sittwe, donde sigue recluido al día de hoy.

7. Presuntamente durante su reclusión el Sr. Aung fue mantenido en régimen de incomunicación hasta el día del juicio oral. Varios de sus familiares fueron privados de libertad en el mismo período, por lo que les resultó imposible intervenir en su nombre. El Sr. Aung es una persona mayor cuya salud se ha deteriorado en los últimos años, ya que ha sufrido un tumor pituitario, una pérdida de visión periférica, várices y una merma de capacidad del sistema inmunitario. Según se informa, las malas condiciones de su reclusión y la imposibilidad de recibir tratamiento especializado suscitan gran preocupación.

8. El Sr. Aung fue acusado de publicar en Internet contenidos sobre actos de violencia que tuvieron lugar días antes de su detención, provocar actos de violencia comunitaria y no informar al NaSaKa de la realización de una procesión de duelo por diez musulmanes asesinados, a pesar de saber que esta iba a tener lugar. Además, tras el registro de su casa posterior a su arresto se descubrieron varios artículos (un *walkie-talkie*, una tarjeta SIM vieja de Bangladesh y divisas) que al parecer se utilizaron para incoar una causa penal contra él. Se presentaron cargos contra el Sr. Aung sobre la base de los artículos 148, 153A

y 505 b) del Código Penal; el artículo 24, párrafo 1, de la Ley de Regulación del Comercio de Divisas; el artículo 6, párrafo 1, de la Ley N° 17/33 de Telegrafía Inalámbrica de Myanmar, (en su forma enmendada por la Ley N° 13/1993); y el artículo 5, párrafo j), de la Ley N° 17/50 de Disposiciones de Emergencia.

9. Los cargos presentados contra el Sr. Aung son, según la fuente, típicos y coherentes con los cargos presentados en causas especialmente selectivas incoadas en las sucesivas dictaduras militares en Myanmar y su finalidad es privar a las personas de los derechos que las asisten en virtud de los artículos 7, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

10. La fuente informa de que la causa del Sr. Aung fue trasladada y juzgada en un tribunal (Tribunal de Distrito de Sittwe) fuera de la jurisdicción en donde ocurrieron los presuntos delitos (Maungdaw), lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, y sin que estuviese acreditado que se hubiese dictado el preceptivo auto de traslado, como se dispone en el artículo 178 de dicho Código. Se adujo para justificar el traslado que este era necesario por las condiciones de inseguridad imperantes en aquel momento en Maungdaw. A juicio de la fuente, esta justificación no tiene fundamento, ya que en el momento del juicio oral la inestabilidad imperante en Sittwe era equiparable a la de Maungdaw.

11. La fuente sostiene que la causa fue juzgada en contravención del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Sr. Aung no pudo obtener los servicios de un abogado o solicitar la comparecencia de testigos de descargo. Ninguna de las personas a quienes solicitó que testificaran estaba dispuesta a declarar debido a las condiciones de inseguridad y el estado de excepción y los consiguientes toques de queda en todo el país. Según parece, el juez dedujo que los testigos no deseaban comparecer porque su declaración contradiría los argumentos de la defensa del Sr. Aung. Todos los testigos de cargo eran agentes de policía o personal militar y las pruebas que aportaron consistían casi exclusivamente en declaraciones orales. Al parecer no se presentaron pruebas materiales sustantivas contra el Sr. Aung.

12. El 21 de noviembre de 2012, el Sr. Aung fue declarado culpable y condenado a 11 años de prisión. La fuente sostiene que el Sr. Aung fue declarado culpable sin que se tuviesen en cuenta los hechos del caso y como resultado de instrucciones emanantes de organismos no judiciales.

13. El Sr. Aung, según parece, ha recurrido la condena ante el Tribunal Superior del estado de Rakhine. El Tribunal Superior confirmó el fallo y la condena del tribunal inferior por vulneración de la Ley de Regulación del Comercio de Divisas. El Sr. Aung tiene otras condenas pendientes. La esposa del Sr. Aung remitió a la Comisión Presidencial de Investigación, creada para examinar la violencia en el estado de Rakhine, una carta en la que exponía los hechos del caso y otra en la que se refería a los presuntos vicios del procedimiento y la no observancia del derecho a un juicio imparcial por el Tribunal de Distrito de Sittwe. La fuente informa de que la esposa del Sr. Aung no ha recibido ninguna respuesta a ninguna de las dos cartas.

14. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Aung es arbitraria y se inscribe en las categorías II y III de los criterios del Grupo de Trabajo para la investigación de casos individuales, debido a la arbitrariedad de su detención y privación de su libertad, el carácter de los cargos formulados en su contra y la parcialidad y los errores del proceso judicial incoado contra él. La fuente también señala que se vulneraron los artículos 7, 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Respuesta del Gobierno

15. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno de Myanmar las alegaciones de la fuente y le solicitó que le facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Aung y aclarara las disposiciones jurídicas en las que se fundamentaba su permanencia en prisión. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido dentro del plazo establecido en los métodos de Trabajo del Grupo ni haya solicitado una prórroga del plazo para presentar su respuesta.

Deliberaciones

16. Sobre la base de la información de la que dispone y de conformidad con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso.

17. Ante todo, el Grupo de Trabajo observa que el caso del Sr. Aung es uno de los varios que han sido llevados ante los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los últimos meses. Pone de manifiesto la gravedad de la violencia y los abusos de los derechos humanos cometidos contra las minorías étnicas y religiosas en Myanmar, en particular los recientes actos de violencia contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine.

18. Los gobiernos, incluidas sus instituciones y sus funcionarios, tienen la obligación de proteger a todos sus ciudadanos, independientemente de su raza, su origen étnico o su religión o creencias. Las estructuras institucionales, en particular el sistema judicial, deben ser dinámicas, sólidas y receptivas a los problemas de derechos humanos de las personas y los grupos residentes en los Estados.

19. Una cuestión importante en el asunto del Sr. Aung es el papel desempeñado por el ejército en su detención y privación de libertad. El Grupo de Trabajo mantiene la posición que ha sostenido sistemáticamente, a saber, que es inaceptable que los juzgados y tribunales militares conozcan de casos de violaciones de los derechos humanos y que las fuerzas armadas asuman la función de administración de justicia, dado que esas estructuras militares no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Al Sr. Aung se le ha denegado el derecho fundamental a un juicio imparcial y a que dicho proceso lo juzgue un órgano jurisdiccional imparcial e independiente. En el presente caso el ejército es a la vez juez y parte y tiene competencia para detener, investigar y enjuiciar, lo que deja poco margen para que un juicio y su resultado sean imparciales.

20. La información de la que dispone el Grupo de Trabajo pone en evidencia una serie de deficiencias de procedimiento y de fondo en el presente caso que contravienen la legislación nacional de Myanmar. Entre ellas figura la vulneración del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que las personas detenidas deben ser trasladadas inmediatamente a una comisaría de policía. En el caso del Sr. Aung no se observó esta disposición. El hecho de que el caso fuese conocido fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito constituye otra vulneración. Si se hubiese tratado de una decisión por motivos de seguridad, ello hubiese sido aceptable, pero la seguridad en Sittwe era y sigue siendo inestable. En un clima de violencia e inseguridad, trasladar el juicio del lugar donde presuntamente tuvieron lugar los incidentes a otro lugar constituye un vicio de procedimiento que cabe sumar a los dos antes mencionados. Pedir pruebas y la comparecencia de testigos cuando la zona estaba bajo toque de queda durante largos períodos de tiempo e imperaba la violencia es una exigencia que ni siquiera cumple los requisitos mínimos aceptables que establecen las normas internacionales en materia de juicio imparcial.

21. La detención y privación de libertad del Sr. Aung, un respetado médico jubilado y dirigente de la comunidad musulmana de inclinaciones moderadas, que, con sus esfuerzos

por calmar a la comunidad musulmana, había apoyado al Gobierno a disipar la violencia, también tiene visos importantes de discriminación por motivos de religión. Numerosos otros miembros de la comunidad musulmana también han sido arrestados y detenidos, dato confirmado por fuentes dignas de crédito, entre ellas las distintas declaraciones e informes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Sr. Tomás Ojea Quintana.

22. En el informe que presentó el 24 de octubre de 2013 en el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, el Sr. Ojea afirmó lo siguiente: "El estado de Rakhine continúa inmerso en una crisis profunda. Existen pocas pruebas de que el Gobierno haya adoptado medidas para responder a las causas subyacentes de la violencia comunitaria o haya puesto en marcha las políticas necesarias para forjar un futuro próspero, armonioso y en paz para ese estado" (A/68/397, párr. 46).

23. Además, se informó al Relator Especial durante su última visita al estado de Rakhine de que, desde el estallido de la violencia en junio, se había privado de libertad a un total de 1.189 personas, entre ellas 260 budistas y 882 musulmanes rohingyas. No se había detenido a ningún funcionario del Estado en relación con los actos de violencia o sus consecuencias. En vista de la coherencia y credibilidad de las denuncias que había recibido sobre vulneraciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, al Relator Especial le seguía preocupando que no se hubiese depurado la responsabilidad de los autores de esas violaciones. Esta cultura de impunidad resultaba particularmente alarmante dada la vulnerabilidad y la marginación que sufrían los miembros de la comunidad rohingya debido a la falta de reconocimiento de su condición jurídica en el país (A/68/397, párr. 47).

24. El Grupo de Trabajo observa que la falta de reconocimiento jurídico de las comunidades musulmanas rohingyas restringe su libertad de circulación dentro del país, lo que vulnera las normas internacionales de derechos humanos y discrimina a dichas comunidades a causa de su identidad religiosa.

25. El Relator Especial reiteró en su informe lo siguiente:

El Estado ha incumplido con su obligación de investigar adecuadamente las acusaciones, presentadas en junio de 2012, de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y violencia sexual; detención y tortura arbitrarias y maltrato a los detenidos; muertes de personas detenidas; y denegación de las garantías procesales y del derecho a un juicio imparcial. Tampoco ha puesto a los responsables a disposición de la justicia. El autor del informe insta a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Derechos Humanos, a permanecer al tanto de este asunto y estudiar la adopción de medidas adicionales hasta que Myanmar haya cumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos (A/68/397, párr. 48).

26. El Relator Especial, tras un ejercicio de verificación que se había realizado recientemente, confirmó que los dirigentes musulmanes locales de Sittwe seguían corriendo el riesgo de ser detenidos arbitrariamente (*ibid.*, párr. 54) Siete dirigentes musulmanes locales, entre ellos el Sr. Aung, estaban siendo juzgados cuando el Sr. Ojea realizó su visita, durante la cual se reunió con él y con otras personas privadas de libertad.

27. El Relator Especial afirmó también lo siguiente:

El Relator Especial cree que muchos hombres y niños musulmanes han sido detenidos arbitrariamente tras la inspección de las aldeas que realizaron las fuerzas de seguridad tras la violencia ocurrida en junio y octubre de 2012. Posteriormente se denegó a los acusados la representación jurídica, fueron juzgados en juicios cerrados al público, a los que ni siquiera pudieron acceder los familiares de los demandados,

no se les proporcionó una interpretación adecuada de las actuaciones judiciales ni información clara sobre los cargos presentados contra ellos (se les llegó incluso a exigir que presentaran listas de testigos), fueron objeto de juicios masivos en los que se procesó a más de 70 personas y fueron encadenados al resto de acusados durante el juicio. Durante su última visita a Buthidaung, en agosto de 2013, se informó al Relator Especial de que, entre el 21 y el 23 de agosto, el tribunal había condenado a un total de 78 miembros de la comunidad rohingya a penas que oscilaban desde los siete años de privación de libertad hasta la cadena perpetua. El autor del informe está seriamente preocupado por el hecho de que esas detenciones y condenas son arbitrarias e injustas, e insta al Gobierno a investigarlas y a adoptar las medidas correctivas necesarias (A/68/397, párr. 55).

Decisión

28. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Aung es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 7, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se inscribe en la categoría II de la clasificación de los casos de detención arbitraria a la que se remite el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se le presentan. Además, la detención y la privación de libertad del Sr. Aung también se considera arbitraria y se inscribe en la categoría III de la clasificación establecida por el Grupo de Trabajo, por cuanto contraviene el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que figura en el anexo de la resolución 43/173 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988, en particular los principios 13, 15, 17, 18 y 36. Por último, el Grupo de Trabajo considera que la detención y privación de libertad del Sr. Aung se inscribe en la categoría V aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

29. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, entre otras cosas, poniendo inmediatamente en libertad al Sr. Aung y concediéndole una reparación adecuada.

30. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno de Myanmar a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 19 de noviembre de 2013]